



Morosidad de pago de cuentas de agua potable rural supera el 50% en la provincia

DÉFICIT. El problema afecta a los Sistemas de Agua Potable Rural (APR), donde dirigentes hacen grandes esfuerzos para reunir los recursos para pagar los costos fijos y seguir dando el vital líquido.

Verónica Salgado

veronica.salgado@australosorno.cl

La entrega de agua potable a familias de sectores rurales depende actualmente de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), anteriormente conocidos como APR, o del abastecimiento mediante camiones aljibe en aquellos lugares donde aún no existe un sistema definitivo. Esta realidad evidencia la precariedad en el acceso al agua en numerosas localidades campesinas, considerando que muchos sistemas de APR se originaron a partir de pozos prediales destinados inicialmente al riego agrícola, pero que debido a la necesidad de las familias terminaron convirtiéndose en fuentes de abastecimiento para consumo humano.

A ello se suma la alta morosidad en el pago de las cuentas de agua potable rural, la cual bordea el 50%, generando serias dificultades para cubrir los costos fijos necesarios para mantener la operatividad de los sistemas. Entre dichos gastos se encuentra el pago de electricidad, fundamental para el bombeo desde los puntos de captación y posterior distribución hacia los hogares, la compra de insumos como cloro o hipoclorito de sodio, mantención de redes, remuneraciones de operadores, contadores y personal administrativo, entre otros.

El atraso en el pago de un servicio básico como el agua potable se transforma así en una problemática compleja, considerando que los Servicios Sanitarios Rurales poseen un carácter social, pero no gratuito. Esta situación genera una fuerte presión para los dirigentes que integran los comités de agua potable, organizaciones comunitarias sin fines de lucro, elegidas democráticamente, y que pese a ser convalidadas por dirigentes sociales, son las responsables de administrar, operar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en zonas rurales.

Su labor resulta clave para garantizar la calidad, cantidad y continuidad del suministro, para lo cual gestionan recursos



EN LA PROVINCIA OPERAN 48 SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL AL ALERO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS (DOH), TODOS CON MOROSOS.

propios y lideran la administración integral del agua en sus respectivos territorios.

Se trata de una problemática que afecta a los 48 Servicios Sanitarios Rurales dependientes de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), organismo encargado de supervisar estos sistemas con el objetivo de proteger la salud de la población y reducir brechas de inequidad sanitaria.

Los históricos sistemas de Agua Potable Rural (APR) pasaron oficialmente a denominarse Servicios Sanitarios Rurales (SSR) tras la entrada en vigencia de la Ley N°20.998, normativa que comenzó a regir en noviembre de 2020. Entre las modificaciones incorporadas, la ley obligó a los comités a inscribirse en el nuevo Registro de Operadores de la Dirección de Obras Hidráulicas, paso fundamental para obtener reconocimiento oficial como SSR.

La transición buscó fortalecer la gestión técnica y administrativa, garantizando que el servicio continúe en manos de las propias comunidades a través de comités o cooperativas bajo la supervisión de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio Públicos (MOP).

Además, la Superintenden-

cia de Servicios Sanitarios (SISS) amplió sus atribuciones para supervisar a los nuevos SSR, con el propósito de mejorar la calidad del servicio entregado a las comunidades rurales.

MOROSIDAD

En la práctica, estas modificaciones han significado algunas ventajas administrativas y regulatorias, pero no han logrado resolver completamente el problema de la evasión y las deudas en las boletas de consumo en los distintos Servicios Sanitarios Rurales. Si bien la normativa contempla la posibilidad de suspender el suministro por morosidad, el carácter social de estos sistemas muchas veces vuelve inviable aplicar esa medida de manera estricta.

Mauricio Rodríguez, presidente del Comité de Agua del sector Cautín Alto, en la comuna de San Pablo, explicó que la organización se constituyó en 2008, aunque recién en 2018 lograron concretar un sistema de agua potable que actualmente abastece a 104 hogares.

"Este es un tema realmente complicado, porque las deudas pueden llegar al 50% en algunos meses. Si bien hacemos esfuerzos para reunir los recursos necesarios y responder a

los costos operacionales, es muy difícil cuando hay personas que simplemente no pagan. Esta realidad también se genera porque, al menos en nuestro sector, tenemos muchas familias vulnerables para quienes pagar la cuenta del agua hace una diferencia importante en su presupuesto. Entonces debemos buscar apoyo en el municipio, que es la instancia más rápida y donde siempre hemos recibido ayuda. El problema es que el Estado se desligó de los costos de mantener los SSR. Debería existir algún subsidio o apoyo para cubrir los costos fijos, porque además somos los dirigentes quienes debemos asumir los cobros y toda la operatividad, muchas veces sólo con nuestra buena voluntad", expresó.

En el sistema de abastecimiento de Maicolpué, en San Juan de la Costa, son 940 los socios que reciben agua potable desde el APR que opera hace más de 30 años y que actualmente es administrado por Ulises Plaza, mientras que el comité es presidido por Adolfo Vargas.

"Acá las deudas son un problema grave, porque más del 50% de las personas simplemente no paga la cuenta, especialmente quienes tienen se-

gundas viviendas. Pagan al día sólo durante diciembre, enero, febrero y marzo, pero desde abril se olvidan completamente. Eso nos perjudica mucho, porque impide generar un colchón financiero para enfrentar emergencias. Con suerte logramos reunir los recursos para cubrir los costos fijos mensuales y además es injusto para la gente que sí paga oportunamente. Lo que hemos hecho es cortar el suministro y cobrar 50 mil pesos por la reposición, pero la gente se enoja y nos ofende, cuando son ellos quienes no cumplen con el pago de un servicio básico que, si no existe consumo, apenas supera los 7 mil pesos mensuales", comentó el dirigente.

Nelson Mansilla, presidente del Comité de Agua Potable de Bahía Mansa, precisó que la morosidad fluctúa entre el 40% y el 50% de los 480 socios que forman parte del sistema, el cual opera desde hace más de 40 años.

"La dinámica acá es que la gente va acumulando tres meses de deuda, porque recién ahí se les corta el agua. Entonces siempre existe un desfase constante de tres meses y recibimos muchos menos recursos de los que deberíamos. Como esto se repite permanentemen-

te, casi nunca tenemos la totalidad de los pagos, y eso nos afecta mucho, porque cuando ocurre una emergencia -algo habitual en un sistema antiguo- tenemos que hacer verdaderas maniobras para solucionarlo, incluyendo solicitar apoyo social al municipio u otros organismos públicos. Lo complicado es que la gente conoce perfectamente sus obligaciones, pero cuando uno les recuerda el pago se molestan. Existen algunos casos sociales, pero esos se analizan de manera individual y están lejos de representar la mayoría. Ni hablar de las segundas viviendas, porque simplemente las dejan abandonadas y cuando vuelven se enojan si tienen el agua cortada pese a no haber pagado. En las ciudades no tienen opción: pagan cuentas mucho más caras y punto", sostuvo el dirigente.

DEUDORES DESDE EL INICIO Claudia Báez, dirigente del Comité de Agua del sector Trocorno, en Osorno, explicó que actualmente son 60 socios los que esperan concretar su SSR, proyecto que se encuentra en etapa de desarrollo desde 2021.

"Este problema es enorme porque el Estado deja solos a dirigentes que no tenemos ninguna protección, pero aún así trabajamos por el bien común, algo que muchas veces la propia comunidad olvida. Los socios deben pagar cuotas muy bajas y aún así se atrasan, entonces ¿qué podemos esperar cuando el SSR esté operativo y las cuentas aumenten?, porque es la única forma de que el sistema pueda autogestionar sus costos fijos. Además, existe otro problema: pasan tantos años para concretar un APR (en algunos casos más de diez años) que después la gente no quiere pagar por el agua, porque durante mucho tiempo la recibió gratis mediante camiones aljibe", expresó la dirigente.

El drama asociado a la falta de agua potable en sectores rurales de la provincia se arrastra desde hace más de una década, debido a que progresivamente se han ido secando las fuentes naturales de abastecimiento del vital elemento. ❧